

CONFERENCIA DE EVELYNE HUBER

9 de octubre de 2009

Presentación

Rossana Castiglioni

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

¿Cuál es el vínculo entre el capitalismo y la democracia? ¿Qué factores sociales y económicos promueven el desarrollo de la democracia? ¿Por qué algunas economías de mercado logran compatibilizar el crecimiento económico con la equidad y otras no? ¿Qué variables explican el surgimiento, la expansión y la reforma de los Estados de bienestar? ¿En qué medida diversos factores políticos y económicos inciden sobre los niveles de pobreza y desigualdad? Aunque responder estas preguntas, de muy diversa naturaleza, resulta una tarea tan compleja como poco evidente, el trabajo de Evelyne Huber ha constituido un aporte decisivo al menos por dos razones: por un lado, Huber ha formulado las preguntas correctas y, por otro, ha sido capaz de ofrecer respuestas certeras. Así, por décadas sus investigaciones han concitado el interés de académicos de todo el mundo, sobre todo en el ámbito de la sociología política y de la economía política.

La trayectoria de Evelyne Huber ha sido tan heterogénea como prolífica y sin dudas ha traspasado no solamente los límites disciplinarios, sino también las fronteras teóricas, metodológicas y geográficas, algo, por lo demás, inusual en una era de creciente especialización académica. El planteamiento de preguntas tan disímiles como las que introdujo Evelyne Huber a lo largo de su carrera y el desarrollo de respuestas plausibles requieren un bagaje teórico y metodológico comprehensivo e informado, así como un profundo conocimiento de la historia política y social de distintos países y regiones, del que la profesora Huber hace gala.

Probablemente, una de las obras en la que se advierte con mayor evidencia el manejo teórico y metodológico de Huber es en su libro seminal, *Capitalist Development and Democracy*, publicado en 1992 junto con Dietrich Rueschmeyer y John Stephens. Este libro explora el vínculo entre el capitalismo y la democracia, a partir de la comparación histórica sistemática de distintos países

de Europa, América Central, el Caribe y Sudamérica. El libro demuestra una evidente preocupación por cerrar la brecha existente entre dos tradiciones de investigación alternativas, que no sólo ocupan estrategias metodológicas diferentes, sino que también arriban a conclusiones disímiles e, incluso, antagónicas. El trabajo fluye cómodamente, iluminado por la sociología histórica y por los distintos enfoques politológicos relevantes, demostrando que, al fin y al cabo, es la combinación de variables de muy diversa índole la que permite entender el florecimiento democrático.

El balance de poder entre las clases sociales aparece como un factor fundamental. Los intereses de clase fueron cruciales en el proceso de promoción y resistencia a la democratización a lo largo de la historia. En este contexto, salvo excepciones, las clases subordinadas fueron las promotoras de la democracia, al tiempo que aquellas que se beneficiaron del *statu quo* resintieron su expansión. El tamaño relativo de la clase trabajadora, así como su capacidad para organizarse y entablar alianzas con otros sectores, permitieron, en gran medida, que la democracia fuese posible. La autonomía relativa del Estado en relación con los sectores dominantes aparece como otro elemento de peso. Sin embargo, cuando el Estado es considerablemente autónomo con respecto a la sociedad civil, las posibilidades de promover la democracia se pueden ver disminuidas. Por último, dado que los Estados interactúan con centros de poder que trascienden sus fronteras, las estructuras transnacionales de poder afectan el desarrollo de las economías nacionales y el rango de opciones posibles en política doméstica. Este libro mereció el reconocimiento Outstanding Book Award 1991-1992, de la sección de Sociología Política de la American Sociological Association, y gran parte de las investigaciones posteriores de Huber descansan en algunos de los hallazgos de este influyente texto.

El reconocimiento de la American Political Science Association llegó en el año 2001, cuando premió *Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Policies in Global Markets* (en colaboración con John Stephens) como el mejor libro de economía política de ese año. Este libro analiza el desarrollo de los Estados de bienestar en las democracias industrializadas y la crisis que les tocó enfrentar a partir del fin de la llamada Edad Dorada. El libro demuestra que las preferencias y el balance de poder político afectan las políticas sociales a través de una relación que está fuertemente influenciada por las características de las instituciones políticas. El libro combina técnicas de investigación tanto cuantitativas como cualitativas y distintos enfoques teóricos. Probablemente se trate de uno de los estudios más comprehensivos acerca del desarrollo y la transformación de los Estados de bienestar que se hayan escrito.

La presentación de la profesora Huber en el contexto de la Cátedra Norbert Lechner y algunas de sus investigaciones más recientes –entre ellas, “Successful Social Policy Regimes? Political Economy, Politics, and Social Policy in Argentina, Chile, Uruguay, and Costa Rica” (en coautoría con John Stephens) y “Politics and Social Spending in Latin America”– han iluminado nuestro conocimiento acerca de los factores que inciden en la pobreza y los elevados niveles de desigualdad que plagan a las naciones de América Latina. Respecto de esto último, los trabajos de Huber parecen sugerir que el crecimiento de los niveles de desigualdad que la región experimentó a partir de los años setenta reflejan el tránsito desde modelos de sustitución de importaciones agotados a economías de mercado, incluso durante períodos de bonanza económica. Sorprendentemente, su trabajo también demuestra que algunos indicadores frecuentemente asociados con la globalización, como la apertura de los mercados de capital, la presencia de instituciones financieras internacionales (como el Fondo Monetario Internacional) y la inversión extranjera directa, tienen una incidencia nimia sobre la desigualdad. En este contexto, las variables políticas y las decisiones en materia de política pública son, sin duda, cruciales. Así, el trabajo de Huber establece que la democracia y la presencia de gobiernos y legislaturas de izquierda por períodos extendidos, así como el incremento del gasto social y de la educación, estarían asociados con niveles de pobreza y desigualdad comparativamente más bajos dentro de la región.

Política, políticas públicas, pobreza y desigualdad

Evelyne Huber

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA (CHAPEL HILL)

Esta conferencia resume los resultados preliminares de un proyecto en curso, de varios años, realizado en colaboración con John Stephens y con algunos de nuestros estudiantes de doctorado. En general, nos interesa explicar por qué algunos países de América Latina, según los indicadores de pobreza y desigualdad, obtienen mejores resultados para su gente que otros países. Específicamente, queremos saber cuál es el papel que juegan las políticas sociales, es decir, el subsidio al ingreso, por un lado, y las políticas de salud y educación, o políticas de capital humano, por otro. Hasta el momento hemos hecho sobre todo análisis cuantitativos de datos de ingreso y gasto, sobre cuyos resultados me referiré a continuación. Lo que necesitamos hacer ahora son análisis comparativos más profundos de los procesos históricos; en otras palabras, queremos saber quién, o qué partidos o grupos de interés, promovieron cuáles políticas públicas; quién ganó con ellas y por qué; cómo se implementaron esas políticas; qué tipo de obstáculos se encontraron, y qué tipo de efectos desagregados tuvieron sobre la pobreza y la desigualdad. También nos interesa el efecto de retroalimentación en el apoyo político entregado a las fuerzas que las favorecieron. Es decir, necesitamos entender la sustentabilidad política de las políticas públicas. Por eso debemos observar con mayor profundidad la estructura de esas políticas, y considerar un rango más amplio de medidas gubernamentales que las que podemos ver a través de los datos de ingreso y gasto.

Intentaré resumir lo que sabemos hasta ahora, y al final especularé un poco sobre las posibilidades de que el desarrollo en América Latina siga la dirección hacia una política social más efectiva, entendiendo por efectiva la reducción de la pobreza y la desigualdad. La presentación hace referencia a tres artículos y al capítulo de un libro (Huber, Nielsen, Pribble y Stephens,

2006; Huber, Mustillo y Stephens, 2008; Pribble, Huber y Stephens, 2009; Huber y Stephens, 2009). Como lo mostrará el despliegue de estos artículos, el estudio se encuentra en la intersección entre la ciencia política y la sociología.

La tabla 1 (véanse las tablas a partir de la página 183) muestra los niveles de pobreza en los países latinoamericanos entre los años 2000 y 2002. Los datos provienen de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y miden pobreza absoluta sobre la base del costo de una canasta de necesidades básicas. La información es parte de un conjunto de datos que ordenamos con el apoyo de la National Science Foundation y que está disponible en nuestro sitio web (www.unc.edu/~jdsteph/index.html). En realidad, para este proyecto usamos dos conjuntos de datos, uno confeccionado con variables económicas, demográficas y relativas al mercado laboral, que comienza en los años setenta, y otro con variables políticas que nosotros codificamos y que comienza en 1945, de manera que nos permite observar la historia política y sus instituciones en el período completo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Entre las variables políticas destacamos de qué tipo de régimen se trata y el equilibrio político de poder entre los partidos en un espectro de derecha e izquierda.

Claramente, los índices de pobreza en América Latina a comienzos del siglo XXI varían mucho: van desde el mínimo 15% en Uruguay hasta el máximo 77% en Honduras. Si hubiéramos tomado datos de la década del noventa, Uruguay hubiese estado bajo el 10% y Argentina estaría aun más abajo. Ahí observamos los efectos de la crisis argentina en los niveles de pobreza tanto internamente como en Uruguay, su país vecino.

La tabla 2 muestra los niveles promedio de desigualdad en la misma década. Los datos provienen del World Income Inequality Database (WIID), de la United Nations University, los que escogimos por su calidad y metodología. Cada observación de la WIID/SEDLAC (Base de Datos Socioeconómica para América Latina y el Caribe) está codificada según su calidad, área de cobertura, unidad de ingreso equivalente, unidad de análisis y el uso de una escala de equivalencia respecto del número de personas por hogar. Hemos eliminado las observaciones con el menor rango cualitativo y las que utilizan como concepto de ingreso el gasto o consumo, así como también aquellas que no cubren la población total. En el caso de observaciones múltiples para el mismo año, consideramos aquellas que a) tienen al individuo como unidad de análisis y b) usan una escala de equivalencia ajustada al número de personas por hogar. Si aún persisten observaciones múltiples, tomamos el promedio de los coeficientes Gini para el año en cuestión.

Lo que podemos ver aquí es, primero que nada, coeficientes globales muy altos; incluso la más inequitativa de las sociedades industriales avanzadas no sobrepasa el 40. En los países nórdicos, el rango se sitúa entre 20 y 24; Estados Unidos, la más inequitativa entre las democracias industriales avanzadas, tiene un promedio Gini de 33 entre 1970 y 1990, llegando a 38 en algunos años (Bradley et al., 2003). En América Latina, el más bajo es Uruguay, con 43, y el más alto Brasil, con 59. Así, tenemos niveles globales más altos que en las democracias industriales avanzadas, como también una brecha promedio considerable.

En las democracias industriales avanzadas, una cantidad significativa de la redistribución se produce a través del sistema de impuestos y transferencias, específicamente a través de las transferencias de la seguridad y la asistencia social y los beneficios de los seguros de cesantía. Los gastos de transferencia en seguridad social durante la década del noventa llegan a un promedio de 21%. En América Latina, sólo Uruguay se aproxima a alguna de las sociedades industriales avanzadas que menos gastan en seguridad y bienestar como porcentaje del PIB: 17,8%. Lo siguen Brasil, con 10%; Argentina, con 7%, y Chile, con 4%. Los más bajos son Venezuela, con 2%, y Colombia, con 1%. Está claro que con el 4% o el 7% del PIB la capacidad de redistribución del Estado es entre una quinta y una tercera parte de la que tienen las sociedades industriales avanzadas. Además, como veremos a continuación, la mayor parte del gasto social en América Latina es regresivo. Los únicos datos globales en serie cronológica sobre gastos de transferencia provienen del Fondo Monetario Internacional (FMI) y engloban el gasto en seguridad social con el gasto en bienestar. Para algunos países y años, existen datos separados de seguridad social y gasto de asistencia social, y esos datos muestran que más del 80% del gasto en la categoría conjunta pertenece a seguridad social. Como la seguridad social se basa en las contribuciones de los empleados y –en la mayoría de los países– empleadores, esto significa que más del 80% de los gastos de transferencia va hacia personas con trabajos en el sector formal. Habitualmente los beneficios de la seguridad social se relacionen con los salarios, de tal modo que quienes reciben mayores ingresos obtienen los mejores beneficios. El gasto en bienestar social, por el contrario, no suele estar relacionado con lo que cada cual impone, y es altamente progresivo. Volveré a este punto más adelante.

Haré un comentario final respecto al gasto. Argentina y Costa Rica fueron los países que más gastaron en salud y educación durante los noventa, con 4,1% y 4,35% del PIB en salud y 4,5% y 5,2% en educación, respectivamente. Esto quiere decir que hicieron, y continuaron haciendo, inversiones impor-

tantes en capital humano. Durante los noventa el gasto de Chile en salud fue comparativamente bajo, lo que es una herencia de las reformas de Pinochet, que dieron un fuerte rol a los proveedores y aseguradores privados de salud.

Es necesario agregar algunos comentarios sobre el perfil distributivo de diferentes tipos de gasto social. Estas observaciones se basan en datos de la CEPAL (2002), los que a su vez se basan en análisis de encuestas internas de varios países latinoamericanos. En el gasto de salud hay diferencias enormes entre los perfiles distributivos de los distintos tipos de gasto: la inversión en cuidados preventivos y primarios, particularmente en zonas rurales, es altamente progresiva, mientras que la inversión en hospitales urbanos es regresiva; en general, el estudio más completo del Banco Mundial sobre el tema concluye que el gasto en salud tiende a ser neutral o ligeramente progresivo (Lindert et al., 2006). En educación, la inversión en educación primaria es altamente progresiva, en tanto que la inversión en educación superior es regresiva.

Para ilustrar estos casos, es útil revisar los resultados de un estudio de la CEPAL (2002). Una comparación del perfil distributivo del gasto en seguridad social (sin incluir asistencia social) en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay entre 1997 y 2003 señala que el 20% de las personas que reciben salarios más bajos en cada país, en el peor de los casos –Colombia– no recibe nada del gasto, y en el mejor –Costa Rica– sólo recibe en torno al 12% del total del gasto social. En el otro extremo, el quintil más alto, el 20% de las personas que recibe los mejores salarios –otra vez en Colombia– obtiene el 80% del gasto social total; incluso en Costa Rica recibe en torno al 45%. La seguridad social, por lo tanto, tiene un perfil de gasto ampliamente regresivo.

Una comparación de la asistencia social o gasto en bienestar durante el mismo período entre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay arroja sólo un caso, Guatemala, donde el 20% de los asalariados más bajos no recibe al menos una parte proporcional. En la mayoría de los casos su participación es claramente mayor que la proporcional; en Argentina los asalariados reciben mucho más que la mitad del total, y en Chile y México apenas un poco menos de la mitad.

En el caso del gasto en salud pública, el estudio muestra diferencias considerables. El quintil más bajo recibe claramente más que la parte proporcional en Chile, Costa Rica y Uruguay, mientras que en Brasil, Colombia y Perú recibe menos de lo proporcional. Este mismo patrón se mantiene en los dos quintiles bajos siguientes; juntos reciben más del 50% del total del gasto en salud en Chile y Costa Rica, los países con los perfiles de gasto público en salud más

progresista. Cabe señalar que Costa Rica también dedica la cantidad más alta del PIB en salud pública, mientras que Chile está lejos de alcanzar su nivel.

Para resumir lo que hemos señalado, si observamos la pobreza y la desigualdad, vemos que Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay actúan en el punto más alto de alguna o ambas de las dos dimensiones, y lo mismo ocurre si observamos el gasto y su perfil distributivo. Brasil es un caso interesante, con una desigualdad muy alta y un gasto social también muy alto (el segundo más alto, con el 17% del PIB, después de Uruguay, que acumula el 24% entre 1991 y 2001), pero con un perfil de gasto más bien regresivo. Entonces, ¿cómo explicamos estos patrones?

Podemos identificar seis factores explicativos: 1) fuerza de la tradición democrática (años de democracia desde 1945); 2) gasto en seguridad y bienestar social en un contexto democrático (la seguridad social *per se* es regresiva); 3) fuerza de los partidos de centroizquierda en la legislatura y duración de cargos de centroizquierda en el poder ejecutivo (acumulativas en años democráticos desde 1945); 4) estructura de los partidos de izquierda (profesional electoral versus partidos de masas); 5) legado de políticas públicas (en particular, poder de los proveedores y aseguradores del sector privado), y 6) instituciones políticas (poder de veto y fragmentación de los actores políticos).

Demostremos la importancia de los tres primeros factores en nuestro análisis cuantitativo; los tres siguientes emergen como fundamentales para un análisis histórico comparativo. Permítanme explicar brevemente cómo medimos la fuerza de la tradición democrática: codificamos no democracia=0, democracia restringida=0,5 y democracia completa=1. Para medir la historia democrática acumulamos los resultados anuales desde 1945 hasta el año en observación.

El equilibrio legislativo partidario se deriva de la codificación de Coppedge (1997), quien consultó a expertos nacionales para clasificar a los partidos políticos de once países de América Latina en dos dimensiones primarias y varias categorías residuales. La dimensión izquierda-derecha refleja una ideología de partidos políticos y un elemento de clase, y la prioridad relativa dada al crecimiento y la redistribución. Sus expertos clasificaron a los partidos desde estas dimensiones en cinco categorías: izquierda, centroizquierda, centro, centroderecha y derecha. Por ejemplo, los partidos de derecha se definieron a sí mismos, o intentaron ser, herederos de las elites tradicionales, fascistas o neofascistas, o militares con un mensaje conservador. Los expertos clasificaron como partidos de centroderecha a los que “se enfocan en los votantes de clases medias o bajas, además de los votantes de elite, al enfatizar la cooperación

con el sector privado, el orden público, el gobierno limpio, la moralidad y la prioridad del crecimiento sobre la distribución”. Clasificaron a los partidos de centro como los que “enfatan el liberalismo político clásico, el Estado de derecho, los derechos humanos y la democracia, sin una agenda social o económica sobresaliente”. También se incluyó en esta categoría a “partidos de gobierno cuyas políticas están tan divididas, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, que no se puede discernir una orientación consistente, que existe sobre todo entre elecciones”. Los expertos clasificaron a los partidos de centroizquierda como los que “enfatan justicia, igualdad, movilidad social o complementariedad entre distribución y acumulación, de manera de no alienar a votantes de clases medias y altas”. Finalmente, clasificaron como partidos de izquierda a los que “emplean la ideología o retórica marxista y enfatizan la prioridad de la distribución sobre la acumulación, y la explotación de las clases trabajadoras por los capitalistas e imperialistas, abogando por un rol fuerte del Estado para corregir las injusticias sociales y económicas”; para más detalles, véase Coppedge (1997).

Adoptamos la clasificación de Coppedge de partidos para los países y años que están en nuestra muestra, con la excepción del peronismo en Argentina, y usamos su esquema de clasificación para expandir la cobertura a un amplio rango de países y años en nuestro conjunto de datos, pero usamos materiales primarios y de referencia en vez de sondeos de expertos. Respecto a algunos partidos en los que había desacuerdo, buscamos consejo de expertos externos, y finalmente el equipo de investigación tomó una decisión conjunta. Después de clasificar a cada partido, sumamos la proporción de escaños en la cámara baja o asamblea constituyente lograda por cada categoría de partidos en cada país y año, lo que derivó en cinco series anuales (izquierda, centroizquierda, centro, centroderecha y derecha) para cada país. Durante los años no democráticos, según la definición de nuestra variable democrática, todas las categorías anotan 0. Siguiendo a Cusack y Fuchs (2002), que llaman a este valor *centro de gravedad ideológica*, calculamos luego el *equilibrio legislativo partidario de poder* (o más simplemente *equilibrio legislativo partidario*), midiéndolo de la siguiente manera: $\text{equilibrio legislativo partidario} = 0*d + 0,5*cd + 1*c + 1,5*ci + 2*i$, donde “d”, “cd”, “c”, “ci” e “i” son la proporción de escaños en la cámara baja mantenidos por los partidos de derecha, centroderecha, centro, centroizquierda e izquierda, respectivamente. Para los años no democráticos, todas las categorías tienen 0, porque los partidos no tienen influencia durante períodos de gobiernos autoritarios. Para el poder ejecutivo desarrollamos una medida paralela con medidas idénticas para las cinco categorías izquierda-

derecha. Como el poder ejecutivo es un organismo único ocupado por un representante único de una sola tendencia ideológica, llamamos a esta variable *partidismo ejecutivo*.

Entre los partidos de izquierda existen diferencias respecto al grado en que enfatizan o son capaces de continuar las políticas sociales integrales y redistributivas. Los partidos que son claramente orientados hacia las elites, es decir, partidos que tienen pocos y débiles lazos con los grupos de la sociedad civil, particularmente los sindicatos, tienden a ser más cautelosos que los partidos que tienen lazos fuertes con los sindicatos y otros grupos de la sociedad civil. El Partido Socialista de Chile es un ejemplo de un partido orientado hacia las elites y el Frente Amplio de Uruguay es un ejemplo de un partido de masas.

El legado de políticas públicas se refiere a los tipos de esquemas de políticas públicas que los gobiernos heredan y que pueden resultar un obstáculo importante en el camino a las reformas políticas en una dirección más inclusiva y redistributiva. Por ejemplo, en Chile los aseguradores y operadores privados de salud que se desarrollaron durante las reformas de Pinochet han mantenido una oposición tenaz hacia los fondos solidarios que formaron parte de la iniciativa de salud Auge impulsada por el Presidente Lagos y que buscaba corregir algunos de los desequilibrios extremos en el gasto entre el sector privado y el sector público de salud.

Finalmente, en sistemas políticos donde el poder está disperso y existen muchos puntos de acceso para los opositores a las políticas reformistas, la política social redistributiva es más difícil de implementar que cuando el poder es más concentrado. Uno de los factores de dispersión es el federalismo, otro el bicameralismo fuerte. Los sistemas de partidos altamente fragmentados también hacen difícil construir coaliciones fuertes para apoyar cualquier política pública, incluyendo las sociales redistributivas.

La última variable política que incluimos es la presencia de regímenes autoritarios altamente represivos. Codificamos a los regímenes autoritarios como una categoría separada, codificada con 1 para cada año en que el país tuvo un régimen autoritario y 0 para cada año sin ese régimen, valor que se basa en el nivel de las violaciones a los derechos humanos cometidas o toleradas por el gobierno autoritario. Las cifras anuales se suman desde quince años antes al año en observación para detectar la disminución del impacto del autoritarismo represivo en el tiempo.

Permítanme explicar nuestros hallazgos cuantitativos. La tabla 3 muestra los coeficientes de regresiones MCO con errores estándares robustos asociados a los grupos. La variable dependiente en esta tabla es el porcentaje de hogares

que viven bajo la línea de la pobreza según la medida de la CEPAL para cada país. Usamos un conjunto de datos de panel no equilibrado con 106 observaciones respecto a 18 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los datos sobre pobreza disponibles en cada país abarcan tiempos variables. Hay un mínimo de dos y un máximo de once observaciones por país. Los datos sobre pobreza fueron compilados desde los estudios de la CEPAL, básicamente del reporte anual *Panorama social*, y cubren desde 1968 hasta 2001.

Una indicación sobre la técnica estadística: el estimador robusto estándar (es decir, no grupal) de la matriz de variabilidad de los parámetros de Huber-White, o “sándwich”, provee corrección de errores estándares en presencia de cualquier patrón de heteroscedasticidad (es decir, variabilidades desiguales de los términos de error), pero no en presencia de errores correlacionados. El estimador robusto de la varianza de grupos es una variante del estimador robusto de grupos de Huber-White que se mantiene válido (es decir, provee una correcta cobertura) en presencia de *cualquier* patrón de correlaciones entre errores *dentro* de unidades, incluyendo correlación serial y correlación debido a componentes específicos de cada unidad. Así, los errores estándares robustos de grupos no son afectados por la presencia de factores específicos y estables no mensurables de países, que causan correlaciones entre errores de observación para el mismo país o cualquier otra forma de error de correlación al interior de la unidad.

Sin embargo, el estimador robusto de grupos de los errores estándares es sólo impermeable a correlaciones de errores *dentro* de los grupos. Es necesario que los errores no se correlacionen *entre* los grupos. Esta última suposición puede violarse si los factores no medidos afectan la variable dependiente en todas las unidades en el mismo momento en el tiempo. Las fluctuaciones económicas globales, como el período de crisis de la deuda en Latinoamérica en la década del ochenta, pueden producir ese tipo de efectos contemporáneos. Para evaluar el impacto potencial de esos factores de un período específico no medido, estimamos los modelos con variables indicativas de la crisis de la deuda (1982-1989) y del período de recuperación, la década del noventa (1990-2000); la categoría de base corresponde a los años 1968-1982.

Nuestro interés principal es el impacto de la política y las políticas públicas (medidas como gasto social y promedio de años de escolaridad de la población adulta) en los resultados de pobreza. La medida del gasto social como porcen-

taje del PIB se obtiene desde diversas fuentes. Los datos de gasto en seguridad y bienestar social son del FMI. Los datos de salud y educación provienen en su mayor parte de la CEPAL. Hicimos operativos los gastos de salud y educación como promedios acumulativos para el período entre 1970 y el año en observación, mientras que medimos el gasto en seguridad y bienestar social cada año. Esta operacionalización entrega un mejor modelo teórico del impacto del gasto social en pobreza, porque los resultados de las inversiones en capital humano se disciernen mejor en el largo plazo. El gasto gubernamental en educación y salud demora varios años en tener un impacto en la pobreza, pues los niños necesitan moverse a través del sistema para mejorar sus capacidades y acceder a mejor salud. Además, las mejoras en salud y educación tienden a ser más sólidas en los países que mantienen su gasto durante períodos de tiempo más largos. En otras palabras, un alto nivel de gasto en salud y educación durante un año no será tan efectivo en reducir la pobreza como un gasto moderadamente alto durante un período de tiempo más largo. Sin embargo, en el caso de las pensiones y otros programas de transferencia, el efecto del gasto es inmediato, porque las políticas involucran un pago efectivo a los individuos, y por eso tiene sentido teórico analizar el impacto del gasto en seguridad y bienestar social de forma anual (y no acumulativa). Las dos medidas de gasto están disponibles para 97 de los 106 años sumados de los países.

Hemos ejecutado otros modelos, pero hemos seleccionado estos cuatro, de modo que los resultados sean más elocuentes. Comenzamos con un modelo básico que incluye todas nuestras variables de control. Los modelos presentados en la tabla 3 proporcionan la base, y testean un conjunto de variables políticas y ligadas a las políticas públicas. El modelo 3 agrega las variables de políticas públicas al modelo de base: promedio de años de escolaridad, promedio acumulado de gasto en salud y educación, y gasto en seguridad y bienestar social. El modelo 4 suma las variables de políticas públicas con el tipo de régimen, fuerza de la tradición democrática y autoritarismo represivo; el modelo 6 reemplaza las variables de régimen por el equilibrio partidario legislativo de largo plazo y considera los efectos del partidismo legislativo sin gasto social. La medida democrática y el equilibrio partidario legislativo son co-lineales y por lo tanto no pueden meterse en la misma ecuación. Finalmente, el modelo 8 presenta el impacto de la desigualdad de ingreso y la variación regional de la pobreza.

Hemos descubierto varios elementos claves desde el punto de vista de nuestro interés en la política y las políticas públicas. Observamos, primero, un efecto consistente y muy significativo de los años de escolaridad promedio.

Este efecto puede interpretarse como el resultado de una política pública en educación exitosa (y hasta cierto punto de salud); es decir, indica la perseverancia de una política para mejorar el capital humano. Así, no sorprende que, una vez que se percibe este resultado, los gastos en salud y educación no tengan un efecto significativo. Segundo, el gasto en seguridad y bienestar social reduce la pobreza (aunque, como veremos, no la desigualdad), pero no es un efecto inmediato de la medición de democracia. Tercero, la democracia de largo plazo reduce la pobreza; las democracias son mejores asignadoras de recursos y, como veremos, el gasto en seguridad social y bienestar en el contexto de la democracia también reduce la desigualdad.

Nuestra medida del equilibrio legislativo partidario está cargado hacia la izquierda; es decir, la izquierda se puntúa más alto, de tal modo que un equilibrio de poder legislativo cargado hacia la izquierda reduce la pobreza, como se podría esperar. Los regímenes altamente autoritarios no aumentan la pobreza más significativamente que otras formas de no democracia. Al final, y no es para nada sorprendente, los altos niveles de desigualdad se asocian con altos niveles de pobreza. Por lo tanto, si pensamos en los casos exitosos en el ranking de pobreza –Chile, Costa Rica y Uruguay–, sus resultados se ajustan a nuestros modelos para los indicadores de políticas públicas. Se trata de países con las tradiciones democráticas más sólidas en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial y de países donde los partidos de centroizquierda han sido comparativamente fuertes.

Llevando nuestro análisis hacia la desigualdad con la misma técnica estadística estimativa, encontramos paralelos sólidos con nuestros hallazgos en pobreza. La tabla 4 muestra que los años de escolaridad promedio –nuestro indicador de una política exitosa en capital humano– reducen los niveles de inequidad. El gasto en seguridad y bienestar social aumenta la desigualdad *per se*, pero ese gasto en un contexto democrático la reduce significativamente.

Aquí nuestra variable dependiente es el índice Gini de desigualdad de los salarios, de la misma fuente que el índice Gini en la tabla 2; la WIID de la United Nations University, versión 2b (UNU-WIDER, 2007), y SEDLAC (2007), la sección latinoamericana de WIID. Seguimos el criterio de selección subrayado más arriba y usamos variables de indicadores de control para dos fuentes de variación hipotéticas restantes, producto de la metodología de encuesta: no hay ajuste entre el número de personas por hogar y los salarios como concepto de ingreso. También controlamos las influencias de cada período, como en las regresiones a la pobreza. Otra vez, para despejar las tablas hemos omitido estas variables metodológicas de control.

Aquí experimentamos con una construcción distinta de la medida del partidismo legislativo y ejecutivo, de manera de evitar la multicolinealidad y ser capaces de incorporar la medida de democracia acumulativa en la misma ecuación. Cuantificamos la composición de escaños en un año dado en cada categoría de partidos con -1 para la derecha, -0,5 para la centroderecha, 0 para el centro, 0,5 para la centroizquierda y 1 para partidos de izquierda, sumando la cantidad de escaños desde 1945 hasta el año en observación. Nuestros resultados muestran que la inclusión prolongada de agentes gubernamentales de izquierda y centro también contribuye a disminuir la desigualdad. En general, obtuvimos resultados similares para el equilibrio de poder del partidismo ejecutivo y legislativo. La literatura enfatiza la preeminencia del poder ejecutivo en América Latina, pero en el largo plazo el equilibrio de poder entre la derecha y la izquierda en el parlamento es igualmente importante.

Llegamos finalmente a los determinantes del gasto social. Tengamos en mente sólo que es un gasto general; no nos dice nada acerca de la asignación de tal gasto, aunque sabemos que el gasto en seguridad y bienestar social suele ser regresivo. Como muestra la tabla 5, la democracia estimula el gasto en seguridad y bienestar social; los gobiernos de todas las tendencias enfrentan demandas para aumentar estos gastos, particularmente si la población envejece. La proporción de habitantes mayores de 65 años tiene un impacto altamente significativo en el gasto de seguridad y bienestar social. No importan los partidismos. Gracias a otros hallazgos, sabemos que el partidismo es importante en la asignación de recursos, no en el monto general. El otro hallazgo asombroso es cuán elástico es el gasto en seguridad y bienestar social frente a los déficits, porque es muy difícil recortar este tipo de gasto.

En contraste con el gasto en seguridad y bienestar social, en la tabla 6 vemos que el gasto en salud y educación es afectado por las restricciones presupuestarias: los déficits lo reducen. Una vez más, la democracia tiende a elevarlo, sin que importen los partidismos. Sin embargo, los regímenes autoritarios represivos deprimen el gasto en salud y educación, cosa que no ocurre con el gasto en seguridad y bienestar social. Como mencioné, codificamos a los regímenes autoritarios en dos categorías, regular y altamente represivos; estos últimos corresponden a los regímenes militares y dictaduras en América Central y los regímenes autoritarios burocráticos en el Cono Sur. Estos regímenes habitualmente intentan reducir los déficits presupuestarios rebajando drásticamente el gasto en salud y educación.

Entonces, para resumir otra vez nuestros hallazgos sobre política y políticas sociales, la democracia a largo plazo es buena para el gasto social.

Eleva el gasto, y ese gasto en un contexto democrático reduce la pobreza y la desigualdad. El equilibrio de poder entre izquierda y derecha no afecta el monto general de gasto social en América Latina, mientras que los poderes ejecutivo y legislativo más cargados a la izquierda se asocian con niveles más bajos de pobreza y desigualdad. La interpretación de la falta de un efecto sobre el gasto general es la siguiente: con pocas excepciones, los partidos de centroizquierda no fueron los creadores de las redes de protección social, si no más bien heredaron regímenes de política social con fuerte dependencia del sistema de pensiones basado en el trabajo, con una variedad de esquemas diferentes para las diversas categorías ocupacionales, y con beneficios desiguales. Durante el último cuarto del siglo XX, los gobiernos de derecha e izquierda enfrentaron las mismas restricciones presupuestarias, por lo que ninguno de ellos hubiese podido aumentar mayormente el gasto. Sin embargo, los gobiernos de izquierda cambiaron la composición o la estructura del gasto para hacerlo más redistributivo. Hoy no tenemos medidas comparables de la estructura del gasto, por lo que necesitamos construir esta interpretación con evidencia de estudios históricos comparativos y con la evidencia indirecta de los datos sobre los determinantes de la pobreza y la desigualdad. Esperamos lograr una medida cuantitativa; el Luxembourg Income Study, la mejor fuente de datos comparativos sobre ingresos y sus fuentes, empieza a incorporar a algunos países latinoamericanos, y debemos ver si podemos construir tal medida sobre esa base.

Terminaré esta presentación con alguna evidencia que apoya nuestra afirmación respecto a que los gobiernos que tienden a la izquierda suelen tener prioridades de gasto distintas; es decir, que tienden a estructurar las políticas sociales de forma distinta a los gobiernos de derecha. Después de dos décadas de hegemonía neoliberal, cuando la política social era vista como una herramienta compensatoria para prevenir los trastornos de las reformas de mercado en América Latina, y por lo tanto se enfocaba hacia los sectores tendientes a trastornarse —aplicándose con discreción política considerable—, ha ganado influencia un nuevo tipo de pensamiento que puede etiquetarse como universalismo básico. Es una adaptación de los principios de la socialdemocracia europea sobre política social universal y solidaria ante un entorno de severas restricciones de recursos y un sistema de impuestos más bien deficiente. Su punto de partida es que todos deben tener derecho a la subsistencia básica y acceso a salud y educación de *calidad*; todos, por contraparte, deben tener deberes recíprocos de trabajo y pago de impuestos (Molina, 2006). Ahora, bajo el universalismo clásico, todos obtienen lo mismo; por ejemplo, una pen-

sión de vejez mínima. Claramente, el 10% o el 20% de los trabajadores con ingresos altos en América Latina no necesita esa pensión. En principio, estos beneficios pueden ser obtenidos a través del sistema de impuestos, pero los sistemas de impuestos en América Latina son muy deficientes, por lo que tiene más sentido seleccionar a los beneficiarios. Lo que es crucial, y diferente del neoliberalismo, es que los beneficios van hacia una clara mayoría, al 60% o más de la población; que estos beneficios son un derecho, no obra de caridad sujeta a la discreción; y que el Estado asume el rol de garantizar estos derechos.

Observemos brevemente algunos ejemplos recientes de innovaciones en políticas públicas que ilustran esta tendencia. Bolsa Familia, en Brasil, un programa de transferencia condicionada de dinero efectivo, es una de las formas más embrionarias de esta nueva dirección en la política social, que se amplía de su forma normal y ha sido extendida por el gobierno del PT del Presidente Lula. Es importante porque llega a una cuarta parte de la población, en la medida en que aparentemente opera como un derecho y no se ha mantenido de una forma clientelística y discrecional, y en la medida en que intenta hacerse cargo del problema de la formación de capital humano para la nueva generación junto con la de atacar la pobreza de la generación actual. El programa aún es embrionario en términos del monto general de recursos destinado a él, aproximadamente el 0,5% del PIB, pero de todas formas crea un legado positivo de políticas públicas y muestra la dirección en la que quiere avanzar el PT.

El Auge, en Chile, introducido por el gobierno de Ricardo Lagos y extendido bajo el de Michelle Bachelet, entrega cobertura de salud garantizada para una cantidad de enfermedades comunes (el objetivo original eran 56), con garantía de tratamiento a lo largo del tiempo y copagos hasta un tope. Éste es un gran paso adelante hacia la salud universalmente garantizada. Se discutió un esquema más universal, pero se eliminó debido a su alto costo y por la oposición de los aseguradores privados, que también lograron eliminar el proyecto de un fondo solidario entre el sector privado y el público. De todos modos, hoy todos los ciudadanos chilenos pueden obtener tratamiento de esas enfermedades de forma asequible y a lo largo del tiempo. Existe una agencia gubernamental que hace valer estas garantías, y el Estado chileno es de hecho eficiente y capaz de dar esas garantías.

El nuevo sistema chileno de pensiones introducido bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet es un claro ejemplo de los rasgos del universalismo básico. Está disponible para el 60% de los trabajadores que menos ganan, y entrega una pensión básica para aquellos que no tienen ingreso por pensiones, o una

pensión básica suplementaria hasta un monto más alto para aquellos con los beneficios más bajos. Este arreglo mantiene el incentivo a contribuir al propio fondo de pensiones. De nuevo, es una cuestión de derecho para la mayoría de la población.

Finalmente, observemos el Plan Equidad y el nuevo sistema de salud introducido bajo el gobierno del Frente Amplio en Uruguay. En el Plan Equidad se trata de un grupo objetivo más pequeño, un tercio de la población, pero dirigido a la población que trabaja y también a los mayores de 65 años. El programa entrega una combinación de transferencias condicionadas de dinero, como Bolsa Familia y la pensión básica chilena. En Uruguay, la política social verdaderamente universal es la salud: el sector público y el sector privado operan bajo las mismas reglas y con el mismo financiamiento; todos los proveedores reciben financiamiento basado en su atención per cápita desde un fondo central, y todos son regulados por una agencia supervisora.

Particularmente en Chile y Uruguay, desde el año 2000 los gobiernos de izquierda claramente han dado forma a una política social que tiende hacia la inclusión y la redistribución. Han reducido la pobreza y la desigualdad al estructurar mejor el gasto social y a través de otras políticas públicas, como el sueldo mínimo, que ha sido importante en Chile. Ahora bien, sobre la base de estos ejemplos, ¿qué podemos esperar respecto de la dirección de las políticas públicas latinoamericanas en el futuro? Podemos atrevernos a ser cautamente optimistas —a menos que la actual crisis de la economía mundial empeore— y todas las apuestas están abiertas, pues nadie tiene la seguridad de predecir cuándo comenzará una recuperación extendida y duradera.

De todos modos, para mantener nuestro argumento, asumamos que la recuperación comenzará en algún momento del año 2010. Podemos ver diferentes desarrollos en países donde la democracia está más o menos consolidada. Donde la democracia está más afianzada, pienso que podemos esperar un aumento del gasto social y algún progreso en la disminución de la pobreza. El ejemplo de Honduras demuestra que la democracia aún es vulnerable, y mientras ocurran esos retrocesos se vuelve más difícil que los partidos de izquierda logren ejercer el poder y fortalecerse.

Desde comienzos del siglo XXI hemos observado un giro hacia la izquierda, algunos moderados y otros populistas, con muchos de estos gobiernos en ejercicio. Estos gobiernos han implementado importantes políticas sociales nuevas que a su vez marcan nuevas expectativas y normas respecto al universalismo y los derechos. El tema es cuán severamente la depresión económica y la crisis financiera impactará en sus presupuestos, y cuánto durarán —esen-

cialmente, si estarán camino a la recuperación cuando se avvicine la próxima elección—. Otro tema importante es cómo se mantendrán unidos los partidos de centroizquierda y sus alianzas: las decisiones de los políticos respecto a sus alianzas electorales obviamente influyen en los resultados electorales. De todas formas, dada la importancia que tendrá el legado de políticas públicas en la toma de decisiones de los gobiernos futuros, no esperamos que los gobiernos de centroderecha simplemente desarmen las reformas de la última década. En suma, pienso que hay razones que nos permiten ser moderadamente optimistas respecto al futuro de las políticas públicas en América Latina.

TABLA 1
Índices de pobreza en América Latina y el Caribe (2000-2002)

Argentina	45,4
Bolivia	62,4
Brasil	37,5
Chile	20,2
Colombia	54,9
Costa Rica	20,3
Ecuador	49,0
El Salvador	48,9
Guatemala	60,2
Honduras	77,3
México	39,4
Nicaragua	69,3
Panamá	34,0
Paraguay	61,0
Perú	54,8
República Dominicana	44,9
Uruguay	15,4
Venezuela	48,6
<i>Promedio</i>	<i>46,9</i>
Primer percentil	16,6
Último percentil	65,0

TABLA 2
Desigualdad en América Latina y el Caribe (promedios de los años noventa)

Argentina	47,0
Bolivia	54,6
Brasil	59,2
Chile	54,5
Colombia	56,2
Costa Rica	46,0
El Salvador	51,4
Guatemala	54,0
Honduras	54,2
México	54,6
Nicaragua	56,3
Panamá	56,0
Paraguay	52,2
Perú	52,7
República Dominicana	48,8
Uruguay	42,8
Venezuela	47,8

TABLA 3

Determinantes de pobreza (coeficientes de regresiones MCO con errores estándares robustos asociados a los grupos)

	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 6	Modelo 8
VARIABLES DE CONTROL				
Crisis de la deuda	8,521**	83,178**	10,553***	10,816 *
Recuperación	5,470	7,956**	11,063**	7,167
PIB per cápita	-0,001	-0,001*	-0,001	-0,002
Inflación	0,001	-0,001	-0,002	0,001
Sector informal	0,392***	0,321***	0,376***	0,210*
Deuda (% del PIB)	0,048**	0,033**	0,038**	0,038***
Participación femenina en la fuerza laboral	-0,334	-0,238	-0,542	-0,209
Comercio	0,058	0,046	0,058	-0,062
Inversión extranjera (flujos)	0,063	0,071	0,064	0,146
Diversidad étnica	10,383**	9,628*	12,867**	-2,804
Políticas y políticas públicas				
Años de escolaridad	-2,371*	-2,982***	-3,511***	-1,601
Salud y educación	-1,518	-0,390		-1,190
Seguridad y bienestar social	-1,085**	-0,701		-1,764**
Democracia		-0,334*		
Autoritarismo represivo		0,206		
Equilibrio legislativo partidario			-0,306	
OTROS INDICADORES				
Gini				0,973**
Constante	43,080**	46,328***	45,897**	9,942
R ²	0,86	0,89	0,88	0,85
N	97	97	106	62

*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05.

Prueba de una cola, excepto recuperación, comercio, inversión extranjera, seguridad y bienestar social.

TABLA 4

Estimaciones MCO de determinantes de desigualdad de ingreso con errores estándar robustos asociados a los grupos

Variables independientes	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4
PIB per cápita	0,297	0,513 [^]	0,868 [^]	0,812 [^]
Inflación	0,000	0,000	0,000	0,001
Dualismo sectorial	0,229***	0,231**	0,188**	0,188**
Heterogeneidad étnica	4,094***	4,150***	4,920***	3,444**
Seguridad y bienestar social	0,386**	0,483*	0,501***	0,424*
Salud y educación	1,226**	0,850	0,778	0,511
Años de escolaridad promedio	-1,161***	-1,427***	-1,424***	-1,486***
Democracia	-0,058	-0,058	-0,112	-0,038
Autoritarismo represivo	0,058	0,019	-0,035	0,043
Partidismo del poder ejecutivo	-0,267*	-0,272*	-0,222*	-0,284
Democracia – Seguridad y bienestar social	-0,029**	-0,032**	-0,026**	-0,033**
Inversión extranjera (acumulada)		-0,002	0,029	0,022
Apertura del mercado de capitales		-0,007	-0,195	-0,048
Apertura comercial		0,036	0,058*	0,048*
FMI		0,034	-0,024	0,089
Inversión extranjera (flujos)		0,303*	0,344*	0,312
Empleo informal			0,099*	
Empleo industrial				-0,347*
Constante	41,932***	41,416***	37,067***	50,093***
R ²	0,72	0,74	0,76	0,75
N	199	195	184	175

*** p≤0,001; ** p≤0,01; * p≤0,05; ^ p≤0,05 significativo pero signo de coeficiente opuesto de hipótesis direccional.

TABLA 5

Estimación de Prais-Winsten de la determinante de gasto en seguridad y bienestar social

Variables	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
PIB per cápita	-0,102	-0,171	-0,162
Población urbana	0,050*	0,033	0,032
Población mayor	1,283***	1,196***	1,205***
Apertura comercial	-0,008	-0,007	-0,008
Inversión extranjera	0,002	-0,001	0,000
Déficit	-0,007	-0,011	-0,010
FMI	-0,025	-0,012	-0,018
Democracia		0,061*	0,054*
Federalismo		0,746	0,774
Autoritarismo represivo		0,124	0,104
Equilibrio partidario legislativo		-0,09	
Equilibrio partidario ejecutivo			-0,026
Común P	0,91	0,88	0,89
Constante	-4,354***	-3,935***	-4,01***
OLS R ²	0,68***	0,73***	0,72***
Prais-Winsten R ²	0,24***	0,31***	0,28***

*** p≤0,001; ** p≤0,01; * p≤0,05.

Prueba de dos colas en apertura, federalismo, federalismo democrático, recuperación y partidismo; prueba de una cola en el resto. N=446.

TABLA 6
 Estimación de Prais-Winsten de las determinantes del gasto en salud y educación

Variables	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
PIB per cápita	0,231*	0,236**	0,200*
	(0,109)	(0,100)	
Población urbana	-0,002	-0,019	-0,010
	(0,023)	(0,023)	
Población joven	0,034	0,101	0,122*
	(0,066)	(0,067)	
Apertura comercial	0,002	0,006	0,003
	(0,006)	(0,006)	
Inversión extranjera	-0,250	-0,024	-0,024
	(0,027)	(0,031)	
Déficit	-0,041**	-0,039**	-0,040**
	(0,015)	(0,015)	
FMI	0,147^	0,121^	0,135^
	(0,035)	(0,030)	
Democracia		0,090***	0,085***
		(0,026)	
Federalismo		0,149	0,287
		(0,683)	
Autoritarismo represivo		-0,259***	-0,226**
		(0,078)	
Equilibrio partidario legislativo		-0,091	
		(0,060)	
Equilibrio partidario ejecutivo			-0,106^
Común P	0,86	0,81	0,81
Constante	1,419	-1,131	-2,206
OLS R ²	0,37***	0,52***	0,53***
Prais-Winsten R ²	0,23***	0,31***	0,32***

Errores estándares de panel corregidos entre paréntesis.

* p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001; ^ significativo pero signo de coeficiente opuesto de hipótesis direccional.

Prueba de dos colas en fuentes de datos, apertura y federalismo; prueba de una cola en el resto.

N=446.

Referencias

- Bradley, David, Evelyne Huber, Stephanie Moller, François Nielsen y John Stephens. (2003). "Distribution and Redistribution in Post-industrial Democracies". *World Politics*, vol. 55, n° 2, pp. 193-228.
- CEPAL. (Varios años). *Anuario estadístico para Latinoamérica y el Caribe*. Santiago: CEPAL.
- CEPAL. (Varios años). *Panorama social de América Latina*. Santiago: CEPAL.
- CEPAL. (2002). *Panorama social de América Latina*. Santiago: CEPAL.
- Coppedge, Michael. (1997). "A Classification of Latin American Political Parties". Working Paper Series, n° 244. The Helen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame.
- Cusack, Thomas R., y Susanne Fuchs. (2002). "Documentation Notes for Parties, Governments, and Legislatures Data Set". Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
- Huber, Evelyne, y John D. Stephens. (2009). "Successful Social Policy Regimes? Political Economy, Politics, and Social Policy in Argentina, Chile, Uruguay, and Costa Rica". En Scott Mainwaring y Timothy Scully, (eds.), *Democratic Governance in Latin America*. Stanford: Stanford University Press.
- Huber, Evelyne, Thomas Mustillo y John D. Stephens. (2008). "Politics and Social Spending in Latin America". *The Journal of Politics*, vol. 70, n° 2, pp. 420-436.
- Huber, Evelyne, François Nielsen, Jenny Pribble y John Stephens. (2006). "Politics and Inequality in Latin America and the Caribbean". *American Sociological Review*, vol. 71, n° 6, pp. 943-963.
- Lindert, Kathy, Emmanuel Skoufias y Joseph Shapiro. (2006). "Redistributing Income to the Poor and the Rich: Public Transfers in Latin America and the Caribbean". SP Discussion Paper n° 605, World Bank Institute.
- Molina, Carlos Gerardo (ed). (2006). *Universalismo básico. Una nueva política social para América Latina*. Washington, D. C.: Inter-American Development Bank.
- Pribble, Jenny. (2008). "Protecting the Poor: Welfare Politics in Latin America's Free Market Era". Tesis doctoral, Department of Political Science, University of North Carolina (Chapel Hill).
- Pribble, Jenny, Evelyne Huber y John D. Stephens. (2009). "Politics, Policies, and Poverty in Latin America". *Comparative Politics*, vol. 41, n° 4, pp. 387-407.
- SEDLAC. (2007). Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean. Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de La Plata en asociación con el World Bank's Latin America and the Caribbean Poverty and Gender Group (LCSPG). www.depeco.econo.unlp.edu.ar/cedlas/sedlac
- UNU-WIDER. (2007). World Income Inequality Database. Versión 2b: www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/wiid/S